

Agradecimientos

El equipo del Observatorio de Derechos Humanos de la Honorable Cámara de Senadores de la Nación agradece la colaboración del Ministerio de Turismo de la Nación por el aporte de las imágenes necesarias para la ilustración de la publicación.

Prólogo

El 10 de diciembre del año 2013 fue creado en el ámbito de la Honorable Cámara de Senadores de la Nación, el Observatorio de Derechos Humanos, mediante Decreto Presidencial DP-1476/13.

Dicho Observatorio, en virtud de las atribuciones otorgadas al Congreso Nacional en el artículo 75 inciso 22 e inciso 23 de la Constitución Nacional, tiene como principales objetivos el de contribuir al cumplimiento del mandato constituyente otorgado a los legisladores nacionales en relación al reconocimiento y garantía de los derechos humanos, y el de promover y proteger los derechos humanos de todos los habitantes del territorio argentino.

Asimismo, entre sus funciones, se encuentra la asistencia legislativa en lo relativo a la adecuación normativa del derecho interno con el derecho internacional de los derechos humanos, y la elaboración y actualización en forma permanente de un registro de toda la legislación interna e internacional referida a derechos humanos vigente en nuestro país.

En tal sentido, este Observatorio se ha propuesto la confección de una colección de compendios normativos referidos a la legislación en materia de derechos humanos vigente en nuestro territorio.

Dicho compendio consta de veintidós volúmenes.

El primer volumen corresponde al ordenamiento de la normativa de carácter nacional, mientras que los veintiún volúmenes restantes corresponden a la normativa provincial y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, exceptuando a las provincias de Catamarca, Neuquén y Santiago del Estero dado que la información no fue hallada en las fuentes de consulta utilizadas. Sin perjuicio de ello, serán incluidas en la próxima edición.

A fin de estandarizar el ordenamiento de la legislación y permitir realizar una comparación lineal entre la normativa nacional y provincial, se diseñó una estructura común para todos los compendios, agrupando los

datos relevados de acuerdo al área temática objeto de cada normativa: adultos mayores, crímenes de lesa humanidad, desaparición forzada de personas, discapacidad, discriminación, educación, género, migrantes, niñez y adolescencia, pueblos originarios, salud, sectores especiales, seguridad social, sindicalización, sistema de política policial, seguridad y justicia, situación de encierro, trabajo y vivienda y hábitat.

En esta iniciativa se propone, dar cuenta del estado de situación de garantía y disfrute de los derechos humanos en nuestro territorio con fecha de corte 20 de octubre de 2014, explicitando tanto las fortalezas como las debilidades en cada uno de los subtemas planteados.

De igual modo, se espera que el conocimiento de la situación evidenciada en cada jurisdicción de nuestra Nación sea un insumo fundamental para propiciar la cooperación tanto interprovincial, como entre Nación y provincias, compartiendo experiencias y desafíos en la materia.

Cabe destacar que toda iniciativa que contribuya a garantizar derechos a la población de un país es un paso adelante en el objetivo final de la función pública: el bienestar social como forma de posibilitar el libre desarrollo, potencialidad y realización de las personas. Una legislación coherente y armoniosa es condición necesaria para alcanzar dicho objetivo.

Finalmente, quisiera concluir adhiriendo a las intenciones puestas de manifiesto en la Carta de Naciones Unidas al reafirmar los derechos fundamentales de las personas, la dignidad y el valor de la persona humana y la igualdad de derechos de hombres y mujeres y de las naciones grandes y pequeñas.

Elena M. Corregido

Directora General

Observatorio de Derechos Humanos del H. Senado de la Nación

Derechos Humanos
Legislación Provincial Vigente
Santa Cruz

El presente trabajo fue realizado por Daniel Eduardo Gómez, Julia Ricci Corregido, Emilio Fernando Rojas y Florencia María Monserrat Salmón, miembros del Observatorio de Derechos Humanos.

INDICE

Declaración Universal de Derechos Humanos	01
Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre	04
Tratados Internacionales con jerarquía constitucional	07
Adultos Mayores	07
Crímenes de Lesa Humanidad	08
Desaparición Forzada de Personas	09
Discapacidad	09
Discriminación	10
Educación	11
Género	12
Mujer	12
Diversidad Sexual	13
Salud Sexual Reproductiva	14
Trata	15
Abuso Sexual	15
Migrantes	16
Niñez y Adolescencia	17
Pueblos Originarios	18
Salud	19
Sectores Especiales	22
Seguridad Social	22
Sindicalización	24
Sistema de Política Policial, Seguridad y Justicia	25
Situación de Encierro	25
Trabajo	26
Vivienda y Hábitat	27
Ley 25391	28
Recomendación Observatorio Derechos Humanos sobre orden público	30

Declaración Universal de Derechos Humanos

Preámbulo

Considerando que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana;

Considerando que el desconocimiento y el menosprecio de los derechos humanos han originado actos de barbarie ultrajantes para la conciencia de la humanidad, y que se ha proclamado, como la aspiración más elevada del hombre, el advenimiento de un mundo en que los seres humanos, liberados del temor y de la miseria, disfruten de la libertad de palabra y de la libertad de creencias;

Considerando esencial que los derechos humanos sean protegidos por un régimen de Derecho, a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión;

Considerando también esencial promover el desarrollo de relaciones amistosas entre las naciones;

Considerando que los pueblos de las Naciones Unidas han reafirmado en la Carta su fe en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la persona humana y en la igualdad de derechos de hombres y mujeres, y se han declarado resueltos a promover el progreso social y a elevar el nivel de vida dentro de un concepto más amplio de la libertad;

Considerando que los Estados Miembros se han comprometido a asegurar, en cooperación con la Organización de las Naciones Unidas, el respeto universal y efectivo a los derechos y libertades fundamentales del hombre, y considerando que una concepción común de estos derechos y libertades es de la mayor importancia para el pleno cumplimiento de dicho compromiso;

LA ASAMBLEA GENERAL proclama la presente DECLARACIÓN UNIVERSAL DE DERECHOS HUMANOS como ideal común por el que todos los pueblos y naciones deben esforzarse, a fin de que tanto los individuos como las instituciones, inspirándose constantemente en ella, promuevan, mediante la enseñanza y la educación, el respeto a estos derechos y libertades, y aseguren, por medidas progresivas de carácter nacional e internacional, su reconocimiento y aplicación universales y efectivos, tanto entre los pueblos de los Estados Miembros como entre

los de los territorios colocados bajo su jurisdicción.

Artículo 1.

Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros.

Artículo 2.

Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición.

Además, no se hará distinción alguna fundada en la condición política, jurídica o internacional del país o territorio de cuya jurisdicción dependa una persona, tanto si se trata de un país independiente, como de un territorio bajo administración fiduciaria, no autónomo o sometido a cualquier otra limitación de soberanía.

Artículo 3.

Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona.

Artículo 4.

Nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre, la esclavitud y la trata de esclavos están prohibidas en todas sus formas.

Artículo 5.

Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes.

Artículo 6.

Todo ser humano tiene derecho, en todas partes, al reconocimiento de su personalidad jurídica.

Artículo 7.

Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley. Todos tienen derecho a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta Declaración y contra toda provocación a tal discriminación.

Artículo 8.

Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales

competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o por la ley.

Artículo 9.

Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado.

Artículo 10.

Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial, para la determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal.

Artículo 11.

1. Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa.

2. Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueron delictivos según el Derecho nacional o internacional. Tampoco se impondrá pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito.

Artículo 12.

Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques.

Artículo 13.

1. Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado.

2. Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país.

Artículo 14.

1. En caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo, y a disfrutar de él, en cualquier país.

2. Este derecho no podrá ser invocado contra una acción judicial realmente originada por delitos comunes o por actos opuestos a los propósitos y principios de las Naciones Unidas.

Artículo 15.

1. Toda persona tiene derecho a una nacionalidad.

2. A nadie se privará arbitrariamente de su nacionalidad ni del derecho a cambiar de nacionalidad.

Artículo 16.

1. Los hombres y las mujeres, a partir de la edad núbil, tienen derecho, sin restricción alguna por motivos de raza, nacionalidad o religión, a casarse y fundar una familia, y disfrutarán de iguales derechos en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolución del matrimonio.

2. Sólo mediante libre y pleno consentimiento de los futuros esposos podrá contraerse el matrimonio.

3. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado.

Artículo 17.

1. Toda persona tiene derecho a la propiedad, individual y colectivamente.

2. Nadie será privado arbitrariamente de su propiedad.

Artículo 18.

Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión; este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o su creencia, individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia.

Artículo 19.

Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión.

Artículo 20.

1. Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación pacíficas.

2. Nadie podrá ser obligado a pertenecer a una asociación.

Artículo 21.

1. Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, directamente o por medio de representantes libremente escogidos.

2. Toda persona tiene el derecho de acceso, en condiciones de igualdad, a las funciones públicas de su país.

3. La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público; esta voluntad se expresará mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse periódicamente, por sufragio universal e igual y por voto secreto u otro procedimiento equivalente que garantice la libertad del voto.

Artículo 22.

Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social, y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, habida cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad.

Artículo 23.

1. Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo.

2. Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por trabajo igual.

3. Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria, que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana y que será completada, en caso necesario, por cualesquiera otros medios de protección social.

4. Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa de sus intereses.

Artículo 24.

Toda persona tiene derecho al descanso, al disfrute del tiempo libre, a una limitación razonable de la duración del trabajo y a vacaciones periódicas pagadas.

Artículo 25.

1. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad.

2. La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales. Todos los niños, nacidos de matrimonio o fuera de matrimonio, tienen derecho a igual protección social.

Artículo 26.

1. Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada; el acceso a los estudios superiores será igual

para todos, en función de los méritos respectivos.

2. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales; favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos, y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz.

3. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos.

Artículo 27.

1. Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten.

2. Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora.

Artículo 28.

Toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social e internacional en el que los derechos y libertades proclamados en esta Declaración se hagan plenamente efectivos.

Artículo 29.

1. Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que sólo en ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad.

2. En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás, y de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática.

3. Estos derechos y libertades no podrán, en ningún caso, ser ejercidos en oposición a los propósitos y principios de las Naciones Unidas.

Artículo 30.

Nada en esta Declaración podrá interpretarse en el sentido de que confiere derecho alguno al Estado, a un grupo o a una persona, para emprender y desarrollar actividades o realizar actos tendientes a la supresión de cualquiera de los derechos y libertades proclamados en esta Declaración.

Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre

La IX Conferencia Internacional Americana, considerando:
que los pueblos americanos han dignificado la persona humana y que sus constituciones nacionales reconocen que las instituciones jurídicas y políticas, rectoras de la vida en sociedad, tienen como fin principal la protección de los derechos esenciales del hombre y la creación de circunstancias que le permitan progresar espiritualmente y alcanzar la felicidad; que, en repetidas ocasiones, los Estados americanos han reconocido que los derechos esenciales del hombre no nacen del hecho de ser nacional de determinado Estado sino que tienen como fundamento los atributos de la persona humana; que la protección internacional de los derechos del hombre debe ser guía principalísima del derecho americano en evolución; que la consagración americana de los derechos esenciales del hombre unida a las garantías ofrecidas por el régimen interno de los Estados, establece el sistema inicial de protección que los Estados americanos consideran adecuado a las actuales circunstancias sociales y jurídicas, no sin reconocer que deberán fortalecerlo cada vez más en el campo internacional, a medida que esas circunstancias vayan siendo más propicias; acuerda: adoptar la siguiente Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre.

PREÁMBULO

Todos los hombres nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están por naturaleza de razón y conciencia, deben conducirse fraternalmente los unos con los otros. El cumplimiento del deber de cada uno es exigencia del derecho de todos. Derechos y deberes se integran correlativamente en toda actividad social y política del hombre. Si los derechos exaltan la libertad individual, los deberes expresan la dignidad de esa libertad. Los deberes de orden jurídico presuponen otros, de orden moral, que los apoyan conceptualmente y los fundamentan. Es deber del hombre servir al espíritu con todas sus potencias y recursos porque el espíritu es la finalidad suprema de la existencia humana y su máxima categoría. Es deber del hombre ejercer, mantener y estimular por todos los medios a su alcance la cultura, porque la cultura es la máxima expresión social e histórica del espíritu. Y puesto que la moral y buenas maneras constituyen la floración más

noble de la cultura, es deber de todo hombre acatarlas siempre.

Capítulo I

DERECHOS

Artículo I. -
Todo ser humano tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona.

Artículo II. -
Todas las personas son iguales ante la ley y tienen los derechos y deberes consagrados en esta declaración sin distinción de raza, sexo, idioma, credo ni otra alguna.

Artículo III. -
Toda persona tiene el derecho de profesar libremente una creencia religiosa y de manifestarla y practicarla en público y en privado.

Artículo IV. -
Toda persona tiene derecho a la libertad de investigación, de opinión y de expresión y difusión del pensamiento por cualquier medio.

Artículo V. -
Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra los ataques abusivos a su honra, a su reputación y a su vida privada y familiar.

Artículo VI. -
Toda persona tiene derecho a constituir familia, elemento fundamental de la sociedad, y a recibir protección para ella.

Artículo VII. -
Toda mujer en estado de gravidez o en época de lactancia, así como todo niño, tienen derecho a protección, cuidados y ayuda especial.

Artículo VIII. -
Toda persona tiene derecho de fijar su residencia en el territorio del Estado de que es nacional, de transitar por él libremente y no abandonarlo sino por su voluntad.

Artículo IX. -
Toda persona tiene el derecho a la inviolabilidad de su domicilio.

Artículo X. -

Toda persona tiene derecho a la inviolabilidad y circulación de su correspondencia.

Artículo XI. -

Toda persona tiene derecho a que su salud sea preservada por medidas sanitarias y sociales, relativas a la alimentación, el vestido, la vivienda y la asistencia médica, correspondientes al nivel que permitan los recursos públicos y los de la comunidad.

Artículo XII. -

Toda persona tiene derecho a la educación, la que debe estar inspirada en los principios de libertad, moralidad y solidaridad humana. Asimismo tiene el derecho de que, mediante esta educación, se le capacite para lograr una digna subsistencia, en mejoramiento del nivel de vida y para ser útil a la sociedad. El derecho a la educación comprende el de igualdad de oportunidades en todos los casos, de acuerdo con las dote naturales, los méritos y el deseo de aprovechar los recursos que puedan proporcionar la comunidad y el Estado. Toda persona tiene derecho a recibir gratuitamente la educación primaria, por lo menos.

Artículo XIII. -

Toda persona tiene el derecho de participar en la vida cultural de la comunidad, gozar de las artes y disfrutar de los beneficios que resulten de los progresos intelectuales y especialmente de los descubrimientos científicos. Tiene asimismo derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de los inventos, obras literarias, científicas y artísticas de que sea autor.

Artículo XIV. -

Toda persona tiene derecho al trabajo en condiciones dignas y a seguir libremente su vocación, en cuanto lo permitan las oportunidades existentes de empleo. Toda persona que trabaja tiene derecho de recibir una remuneración que, en relación con su capacidad y destreza le asegure un nivel de vida conveniente para sí misma y su familia.

Artículo XV. -

Toda persona tiene derecho a descanso, a honesta recreación y a la oportunidad de emplear útilmente el tiempo libre en beneficio de su mejoramiento espiritual y físico.

Artículo XVI. -

Toda persona tiene derecho a la seguridad social que le proteja contra las consecuencias de la desocupación, de la vejez y de la incapacidad que, proveniente de cualquier otra causa ajena a su voluntad, la imposibilite

física o mentalmente para obtener los medios de subsistencia.

Artículo XVII. -

Toda persona tiene derecho a que se le reconozca en cualquier parte como sujeto de derechos y obligaciones, y a gozar de los derechos civiles fundamentales.

Artículo XVIII. -

Toda persona puede concurrir a los tribunales para hacer valer sus derechos. Asimismo debe disponer de un procedimiento sencillo y breve por el cual la justicia la ampare contra actos de la autoridad que violen, en perjuicio suyo, alguno de los derechos fundamentales consagrados constitucionalmente.

Artículo XIX. -

Toda persona tiene derecho a la nacionalidad que legalmente le corresponda y el de cambiarla, si así lo desea, por la de cualquier otro país que esté dispuesto a otorgársela.

Artículo XX. -

Toda persona, legalmente capacitada, tiene el derecho de tomar parte en el gobierno de su país, directamente o por medio de sus representantes, y de participar en las elecciones populares, que serán de voto secreto, genuinas, periódicas y libres.

Artículo XXI. -

Toda persona tiene el derecho de reunirse pacíficamente con otras, en manifestación pública o en asamblea transitoria, en relación con sus intereses comunes de cualquier índole.

Artículo XXII. -

Toda persona tiene el derecho de asociarse con otras para promover, ejercer y proteger sus intereses legítimos de orden político, económico, religioso, social, cultural, profesional, sindical o de cualquier otro orden.

Artículo XXIII. -

Toda persona tiene derecho a la propiedad privada correspondiente a las necesidades esenciales de una vida decorosa, que contribuya a mantener la dignidad de la persona y del hogar.

Artículo XXIV. -

Toda persona tiene derecho de presentar peticiones respetuosas a cualquier autoridad competente, ya sea por motivo de interés general, ya de interés particular, y el de obtener pronta resolución.

Artículo XXV. -

Nadie puede ser privado de su libertad sino en los casos y según las formas establecidas por leyes preexistentes. Nadie puede ser detenido por incumplimiento de obligaciones de carácter netamente civil. Todo individuo que haya sido privado de su libertad tiene derecho a que el juez verifique sin demora la legalidad de la medida y a ser juzgado sin dilación injustificada o, de lo contrario, a ser puesto en libertad. Tiene derecho también a un tratamiento humano durante la privación de su libertad.

Artículo XXVI. -

Se presume que todo acusado es inocente, hasta que se pruebe que es culpable. Toda persona acusada de delito tiene derecho a ser oída en forma imparcial y pública, a ser juzgada por tribunales anteriormente establecidos de acuerdo con leyes preexistentes y a que no se le impongan penas crueles, infamantes o inusitadas.

Artículo XXVII. -

Toda persona tiene el derecho de buscar y recibir asilo en territorio extranjero, en caso de persecución que no sea motivada por delitos de derecho común y de acuerdo con la legislación de cada país y con los convenios internacionales.

Artículo XXVIII. -

Los derechos de cada hombre están limitados por los derechos de los demás, por la seguridad de todos y por las justas exigencias del bienestar general y del desenvolvimiento democrático.

Capítulo II

DEBERES

Artículo XXIX. -

Toda persona tiene el deber de convivir con las demás de manera que todas y cada una puedan formar y desenvolver integralmente su personalidad.

Artículo XXX. -

Toda persona tiene el deber de asistir, alimentar, educar y amparar a sus hijos menores de edad, y los hijos tienen el deber de honrar siempre a sus padres y el de

asistirlos, alimentarlos y ampararlos cuando éstos lo necesiten.

Artículo XXXI. -

Toda persona tiene el deber de adquirir a lo menos la instrucción primaria.

Artículo XXXII. -

Toda persona tiene el deber de votar en las elecciones populares del país de que sea nacional, cuando esté legalmente capacitada para ello.

Artículo XXXIII. -

Toda persona tiene el deber de obedecer a la ley y demás mandamientos legítimos de las autoridades de su país y de aquel en que se encuentre.

Artículo XXXIV. -

Toda persona hábil tiene el deber de prestar los servicios civiles y militares que la patria requiera para su defensa y conservación, y en caso de calamidad pública, los servicios de que sea capaz. Asimismo tiene el deber de desempeñar los cargos de elección popular que le correspondan en el Estado de que sea nacional.

Artículo XXXV. -

Toda persona tiene el deber de cooperar con el Estado y con la comunidad en la asistencia y seguridad sociales de acuerdo con sus posibilidades y con las circunstancias.

Artículo XXXVI. -

Toda persona tiene el deber de pagar los impuestos establecidos por la ley para el sostenimiento de los servicios públicos.

Artículo XXXVII. -

Toda persona tiene el deber de trabajar, dentro de su capacidad y posibilidades, a fin de obtener los recursos para su subsistencia o en beneficio de la comunidad.

Artículo XXXVIII. -

Toda persona tiene el deber de no intervenir en las actividades políticas que, de conformidad con la ley, sean privativas de los ciudadanos del Estado en que sea extranjero.

TRATADOS INTERNACIONALES CON JERARQUÍA CONSTITUCIONAL

1. Declaración Universal de los Derechos Humanos.
2. Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre.
3. Decreto Ley 6286/56 Convención para la Prevención y sanción del Delito de Genocidio.
4. Ley 17722 Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial.
5. Ley 23054 Convención Americana sobre Derechos Humanos "Pacto de San José de Costa Rica" y Reservas.
6. Ley 23179 Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y Reserva.
7. Ley 23313 Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y su Protocolo Facultativo.
8. Ley 23338 Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Cruelles, Inhumanos o Degradantes y Declaración.
9. Ley 23849 Convención sobre los Derechos del Niño. Reservas y Declaraciones.
10. Ley 24556 sobre Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas.
11. Ley 24584 Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad.

ADULTOS MAYORES

“... establecer un grupo de trabajo de composición abierta, en el que puedan participar todos los Estados Miembros de las Naciones Unidas, con el propósito de aumentar la

protección de los derechos humanos de las personas de edad examinando el marco internacional vigente en materia de derechos humanos de las personas de edad y determinando sus posibles deficiencias y la mejor forma de subsanarlas, incluso mediante el estudio, cuando corresponda, de la viabilidad de nuevos instrumentos y medidas, y solicita al Secretario General que preste a ese grupo de trabajo todo el apoyo necesario, dentro de los límites de los recursos existentes, mientras dure su mandato...”

Resolución Naciones Unidas A/RES/65/182 del 04/02/2011.

Ley 48 Pensiones a la vejez.

Ley 2669 Promoción y protección integral de los adultos mayores.

Ley 2912 Marco regulatorio para el funcionamiento de los establecimientos residenciales para adultos mayores.

Ley 2997 Convenio sobre "Prevención del abuso y maltrato hacia los adultos mayores".

CRIMENES DE LESA HUMANIDAD

“...Considerando que los crímenes de guerra y los crímenes de lesa humanidad figuran entre los delitos de derecho internacional más graves,

Convencidos de que la represión efectiva de los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa humanidad es un elemento importante para prevenir esos crímenes y proteger los derechos humanos y libertades fundamentales, y puede fomentar la confianza, estimular la cooperación entre los pueblos y contribuir a la paz y la seguridad internacionales...”

Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y los Crímenes de Lesa Humanidad.

Ley 2966 Creación del Archivo Provincial de la Memoria.

DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS

“...Considerando que la desaparición forzada de personas constituye una afrenta a la conciencia del Hemisferio y una grave ofensa de naturaleza odiosa a la dignidad intrínseca de la persona humana, en contradicción con los principios y propósitos consagrados en la Carta de la Organización de los Estados Americanos;

Considerando que la desaparición forzada de personas viola múltiples derechos esenciales de la persona humana de carácter inderogable, tal como están consagrados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y en la Declaración Universal de Derechos Humanos;
(...)

Reafirmando que la práctica sistemática de la desaparición forzada de personas constituye un crimen de lesa humanidad...”

Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada
de Personas.

Información no hallada en las fuentes de consulta.

DISCAPACIDAD

“...REAFIRMANDO que las personas con discapacidad tienen los mismos derechos humanos y libertades fundamentales que otras personas; y que estos derechos, incluido el de no verse sometidos a discriminación fundamentada en la discapacidad, dimanán de la dignidad y la igualdad que son inherentes a todo ser humano...”

Convención Interamericana para Eliminación de Todas
las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad.

Ley 1662 Sistema de protección integral de las personas que sufren alguna discapacidad.

Ley 2556 Dispónese que el producido de multas se destine a la financiación del funcionamiento de hogares de contención, recreación y rehabilitación de personas con discapacidad.

Ley 2879 Sistema de Prestaciones Básicas de Habilitación y Rehabilitación Integral a Favor de las Personas con Discapacidad.

Ley 2884 Incorpora a la Ley Provincial N° 1662 beneficio para madre de hijo discapacitado.

Ley 2979 Pensión a la discapacidad.

Ley 3130 Adhesión a Ley Nacional N° 25682, que adopta el bastón verde como instrumento de orientación en personas de baja visión.

Ley 3132 Incorpora a Ley Provincial N° 1662 el acceso con perros guías a espacios públicos y privados.

Ley 3155 Normas de accesibilidad para plazas y espacios públicos.

Ley 3212 Creación del Consejo Provincial Asesor de Discapacidad.

Ley 3231 Emisión de facturas en sistema braille.

Ley 3338 Adhesión a la Ley Nacional N° 24716 sobre licencia para trabajadoras madres de hijos con Síndrome de Down.

DISCRIMINACION

“...convencidos de que la existencia de barreras raciales es incompatible con los ideales de toda la sociedad humana; alarmados por las manifestaciones de discriminación racial que todavía existen en algunas partes del mundo y por las políticas gubernamentales basadas en la superioridad o el odio racial, tales como las de "apartheid", segregación o separación; resueltos a adoptar todas las medidas necesarias para eliminar rápidamente la discriminación racial en todas sus formas y manifestaciones y a prevenir y combatir las doctrinas y prácticas racistas con el fin de promover el entendimiento entre las razas y edificar una comunidad internacional libre de todas las formas de segregación y discriminación raciales...”

Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial.

Información no hallada en las fuentes de consulta.

EDUCACION

“...Que, puesto que las guerras nacen en la mente de los hombres, es en la mente de los hombres donde deben erigirse los baluartes de la paz; (...)

Que la amplia difusión de la cultura y la educación de la humanidad para la justicia, la libertad y la paz son indispensables a la dignidad del hombre y constituyen un deber sagrado que todas las naciones han de cumplir con un espíritu de responsabilidad y de ayuda mutua; (...)

Por estas razones, los Estados Partes en la presente Constitución, persuadidos de la necesidad de asegurar a todos el pleno e igual acceso a la educación, la posibilidad de investigar libremente la verdad objetiva y el libre intercambio de ideas y de conocimientos, resuelven desarrollar e intensificar las relaciones entre sus pueblos, a fin de que éstos se comprendan mejor entre sí y adquieran un conocimiento más preciso y verdadero de sus respectivas vidas...”

Constitución de la UNESCO.

Ley 263 Ley de educación.

Ley 1333 Adhesión a la Ley Nacional N° 22047 sobre "Creación del Consejo Federal de Cultura y Educación".

Ley 2290 Creación del programa "Educación en derechos humanos-herramienta de la democracia" en el nivel de enseñanza primario.

Ley 2578 Régimen Especial de Justificación de Inasistencias para Alumnas Embarazadas.

Ley 3043 Adhesión a Leyes Nacionales N° 25864 "Ciclo lectivo anual mínimo", N° 26058 "Ley de educación técnico profesional", N° 26075

"Financiamiento en educación ciencia y tecnología" y N° 26150 "Programa Nacional de Educación Sexual Integral".

Ley 3305 Ley de Educación Provincial.

Ley 3351 Adhesión provincial a Ley Nacional N° 26892. Ley antibullying en las escuelas.

GENERO

MUJER

"...recordando que la discriminación contra la mujer viola los principios de igualdad de derechos y del respeto de la dignidad humana, que dificulta la participación de la mujer, en las mismas condiciones que el hombre, en la vida política, social, económica y cultural de su país, que constituye un obstáculo para el aumento del bienestar de la sociedad y de la familia y que entorpece el pleno desarrollo de las posibilidades de la mujer para prestar servicio a su país y a la humanidad; preocupados por el hecho de que en situaciones de pobreza la mujer tiene un acceso mínimo a la alimentación, la salud, la enseñanza, la capacitación y las oportunidades de empleo, así como a la satisfacción de otras necesidades; (...)

convencidos de que la máxima participación de la mujer, en igualdad de condiciones con el hombre, en todos los campos, es indispensable para el desarrollo pleno y completo de un país, el bienestar del mundo y la causa de la paz;

teniendo presente el gran aporte de la mujer al bienestar de la familia y al desarrollo de la sociedad, hasta ahora no plenamente reconocido, la importancia social de la maternidad y la función de los padres en la familia y en la educación de los hijos, y conscientes de que el papel de la mujer en la procreación no debe ser causa de discriminación sino que la educación de los niños exige la responsabilidad compartida entre hombres y mujeres y la sociedad en su conjunto;

reconociendo que para lograr la plena igualdad entre el hombre y la mujer es necesario modificar el papel tradicional tanto del hombre como de la mujer en la sociedad y en la familia..."

Convención sobre la eliminación de Todas las formas de
Discriminación contra la Mujer.

Ley 2302 Norma electoral. Cupo femenino.

Ley 2337 Ratificación de convenio "Programa materno infantil".

Ley 2466 Ley de protección contra la violencia familiar.

Ley 2599 Creación del Consejo Provincial de la Mujer.

Ley 2819 Programa de emprendimientos para la mujer santacruceña
(PRO.EM.SA.).

Ley 2855 Creación del registro de deudores alimentarios.

Ley 2928 Creación del registro de obstrutores de vínculos de los hijos con
su progenitor no conviviente y familia extendida.

Ley 3201 Adhesión a Ley Nacional N° 26485. Erradicación de violencia
contra la mujer.

DIVERSIDAD SEXUAL

"...el mundo ha ido aceptando poco a poco que los seres humanos sean diferentes por su sexo, raza u origen étnico y religión y que se respeten esas diferencias sin que sean causa de discriminación. Con todo, algunos países siguen sin aceptar otros dos aspectos de la diversidad humana: que haya personas de orientación sexual o de identidad de género diferentes; que dos mujeres, o dos hombres, se enamoren y que no sea el cuerpo con el que se nace lo que determine la identidad personal como mujer, como hombre o como ninguno de los dos..."

Declaración de Montréal Conferencia Internacional
sobre Derechos Humanos LGBT.

Ley 3298 Adhesión a la Ley Nacional N° 26743 "Ley de Identidad de
Género".

SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA

“...f) el derecho a la protección de la salud y a la seguridad en las condiciones de trabajo, incluso la salvaguardia de la función de reproducción. (...)

b) implantar la licencia de maternidad con sueldo pagado o con prestaciones sociales comparables sin pérdida del empleo previo, la antigüedad beneficios sociales; (...)

d) prestar protección especial a la mujer durante el embarazo en los tipos de trabajos que se haya probado puedan resultar perjudiciales para ella.(...)

Artículo 12. - 1. Los Estados partes adoptarán todas las medidas apropiadas para eliminar discriminación contra la mujer en la esfera de la atención médica a fin de asegurar, en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres, el acceso a servicios de atención médica, inclusive los que se refieren a la planificación de la familia.

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 1 supra, los Estados partes garantizarán a la mujer servicios apropiados en relación con el embarazo, el parto y el período posterior al parto, proporcionando servicios gratuitos cuando fuere necesario y le asegurarán una nutrición adecuada durante el embarazo y la lactancia...”

Convención sobre la eliminación de Todas las formas de Discriminación contra la Mujer.

Ley 2937 Adhesión a Ley Nacional N° 26130 -Régimen para las Intervenciones de Contracepción Quirúrgica.

Ley 2980 Examen de detección precoz de hipotiroidismo congénito, fenilcetonuria y fibrosis quística en recién nacidos.

Ley 3175 Adhiérase la provincia de Santa Cruz a la Ley Nacional N° 25673 de "Creación del Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable".

Ley 3196 Adhesión a Ley Nacional N° 25929 de "Derechos de padres e hijos durante el proceso de nacimiento".

Ley 3225 Reconocimiento de la infertilidad humana como enfermedad.

Ley 3331 Adhesión a la Ley Nacional N° 26873 sobre lactancia materna.

Ley 3376 Aprueba Convenio referido al Programa Nacional de Educación Sexual y Procreación Responsable.

TRATA

“...Considerando que la prostitución y el mal que la acompaña, la trata de personas para fines de prostitución, son incompatibles con la dignidad y el valor de la persona humana y ponen en peligro el bienestar del individuo, de la familia y de la comunidad...”

Convenio para la Represión de la Trata de Personas y de la Explotación de la Prostitución Ajena.

Ley 3352 Trata de persona.

ABUSO SEXUAL

“...Los Estados Partes adoptarán todas las medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas apropiadas para proteger al niño contra toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual, (...)

Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para promover la recuperación física y psicológica y la reintegración social de todo niño víctima de: cualquier forma de abandono, explotación o abuso...)

Convención sobre los Derechos del Niño.

“... Se entenderá que violencia contra la mujer incluye la violencia física, sexual y psicológica:

- α. que tenga lugar dentro de la familia o unidad doméstica o en cualquier otra relación interpersonal, ya sea que el agresor comparta o haya compartido el mismo domicilio que la mujer, y que comprende, entre otros, violación, maltrato y abuso sexual;*
- β. que tenga lugar en la comunidad y sea perpetrada por cualquier persona y que comprende, entre otros, violación, abuso sexual, tortura, trata de personas, prostitución forzada, secuestro y acoso sexual en el lugar de trabajo, así como en instituciones educativas, establecimientos de salud o cualquier otro lugar...”*

Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer “Convención de Belem do Para”

Información no hallada en las fuentes de consulta.

MIGRANTES

“...Considerando la situación de vulnerabilidad en que con frecuencia se encuentran los trabajadores migratorios y sus familiares debido, entre otras cosas, a su ausencia del Estado de origen y a las dificultades con las que tropiezan en razón de su presencia en el Estado de empleo, (...)

Teniendo en cuenta el hecho de que a menudo la migración es causa de graves problemas para los familiares de los trabajadores migratorios, así como para los propios trabajadores, particularmente debido a la dispersión de la familia,

Teniendo presente que los problemas humanos que plantea la migración son aún más graves en el caso de la migración irregular, y convencidos por tanto de que se debe alentar la adopción de medidas adecuadas a fin de evitar y eliminar los movimientos y el tránsito clandestinos de los trabajadores migratorios, asegurándoles a la vez la protección de sus derechos humanos fundamentales,

Considerando que los trabajadores no documentados o que se hallan en situación irregular son empleados frecuentemente en condiciones de trabajo menos favorables que las de otros trabajadores y que para determinadas empresas ello constituye un aliciente para buscar ese tipo de mano de obra con el objeto de obtener los beneficios de una competencia desleal,

Considerando también que la práctica de emplear a trabajadores migratorios que se hallen en situación irregular será desalentada si se reconocen más ampliamente los derechos humanos fundamentales de todos los trabajadores migratorios y, además, que la concesión de determinados derechos adicionales a los trabajadores migratorios y a sus familiares que se hallen en situación regular alentará a todos los trabajadores migratorios a respetar y cumplir las leyes y procedimientos establecidos por los Estados interesados...”

Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares.

Información no hallada en las fuentes de consulta.

NIÑEZ Y ADOLESCENCIA

“...Convencidos de que la familia, como grupo fundamental de la sociedad y medio natural para el crecimiento y bienestar de todos sus miembros, y en particular de los niños, debe recibir la protección y asistencia necesarias para poder asumir plenamente sus responsabilidades dentro de la comunidad,

Reconociendo que el niño, para el pleno y armonioso desarrollo de su personalidad, debe crecer en el seno de la familia, en un ambiente de felicidad, amor y comprensión,

Considerando que el niño debe estar plenamente preparado para una vida independiente en sociedad y ser educado en el espíritu de los ideales proclamados en la Carta de las Naciones Unidas y, en particular, en un espíritu de paz, dignidad, tolerancia, libertad, igualdad y solidaridad, (...)

Reconociendo que en todos los países del mundo hay niños que viven en condiciones excepcionalmente difíciles y que esos niños necesitan especial consideración...”

Convención sobre los Derechos del Niño.

Ley 978 Creación del Instituto de Protección a la Menor Madre Soltera.

Ley 2176 Obligatoriedad del rastreo en sangre capilar del recién nacido para la detección de fenilcetonuria e hipotiroidismo congénito.

Ley 2179 Sistema de Identificación personal de los Recién Nacidos.

Ley 2325 Adhesión a la Ley Nacional N° 23849, aprobatoria de la convención de los derechos del niño.

Ley 2337 Ratificación de convenio "Programa Materno Infantil".

Ley 2348 Dispone exención de pago para menores.

Ley 2466 Ley de protección contra la violencia familiar.

Ley 2578 Régimen Especial de Justificación de Inasistencias para Alumnas Embarazadas.

Ley 2598 Carta intención referida al "Pacto por la niñez".

Ley 2786 Adhesión a la Ley Nacional N° 25854 de creación del Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos.

Ley 2831 Legislatura juvenil.

Ley 2856 Adhesión a la Ley Nacional N° 25273. Derechos de adolescentes embarazadas dentro del sistema educativo.

Ley 2855 Creación del registro de deudores alimentarios.

Ley 2908 Convenio de ejecución plan nacional de seguridad alimentaria "El hambre mas urgente", comedores escolares.

Ley 2928 Creación del registro de obstrutores de vínculos de los hijos con su progenitor no conviviente y familia extendida.

Ley 2955 Creación del sistema integral provincial de la juventud.

Ley 2980 Examen de detección precoz de hipotiroidismo congénito, fenilcetonuria y fibrosis quística en recién nacidos.

Ley 2983 Convenio de cooperación programa nacional de desarrollo infantil "Primeros años".

Ley 3062 Protección integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes.

Ley 3196 Adhesión a Ley Nacional N° 25929 de "Derechos de padres e hijos durante el proceso de nacimiento".

Ley 3223 Adhesión a Ley Nacional N°26581. Registro nacional de personas menores extraviadas.

Ley 3351 Adhesión provincial a Ley Nacional N° 26892. Ley antibullying en las escuelas.

Ley 3370 Convenio con la Nación sobre programas para la promoción o restitución de los Derechos del Niño, Niñas y Adolescentes.

Ley 3371 Aprueba Convenio con Nación para asistencia técnica y financiera del proyecto "Primera Infancia".

PUEBLOS ORIGINARIOS

"...Reconociendo las aspiraciones de esos pueblos a asumir el control de sus propias instituciones y formas de vida y de su desarrollo económico y a mantener y fortalecer sus identidades, lenguas y religiones, dentro del marco de los Estados en que viven;

Observando que en muchas partes del mundo esos pueblos no pueden gozar de los derechos humanos fundamentales en el mismo grado que el resto de la población de los Estados en que viven y que sus leyes, valores, costumbres y perspectivas han sufrido a menudo una erosión;

Recordando la particular contribución de los pueblos indígenas y tribales a la diversidad cultural, a la armonía social y ecológica de la humanidad y a la cooperación y comprensión internacionales...”

Convenio Organización Internacional del Trabajo N° 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes.

Ley 937 Crea la comisión provincial de apoyo al aborigen.

Ley 2785 Adhesión a la Ley Nacional N° 23302 de protección de comunidades aborígenes.

Ley 3031 Adhesión a Ley Nacional N° 26331. Presupuestos mínimos de protección de los bosques nativos.

Ley 3137 Adhesión a Ley Nacional N° 25.743 de protección del patrimonio arqueológico y paleontológico y N° 25.517 de tratamiento de restos mortales de comunidades aborígenes.

Ley 3142 Ordenamiento territorial de bosques nativos provincia de Santa Cruz.

SALUD

“...La salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades.

El goce del grado máximo de salud que se pueda lograr es uno de los derechos fundamentales de todo ser humano sin distinción de raza, religión, ideología política o condición económica o social.

La salud de todos los pueblos es una condición fundamental para lograr la paz y la seguridad, y depende de la más amplia cooperación de las personas y los Estados.

Los resultados alcanzados por cada Estado en el fomento y protección de la salud son valiosos para todos.

La desigualdad de los diversos países en lo relativo al fomento de la salud y el control de enfermedades, sobre todo las transmisibles, constituye un peligro común. (...)

La extensión a todos los pueblos de los beneficios de los conocimientos médicos, psicológicos y afines es esencial para alcanzar el más alto grado de salud.

Una opinión pública bien informada y una cooperación activa por parte del público son de importancia capital para el mejoramiento de la salud del pueblo.

Los gobiernos tienen responsabilidad en la salud de sus pueblos, la cual sólo puede ser cumplida mediante la adopción de medidas sanitarias y sociales adecuadas..."

Constitución de la Organización Mundial de la Salud.

Ley 952 Creación del Servicio Central de Hemoterapia de la provincia.

Ley 2010 Adhesión a la Ley Nacional N° 21541 y creación del Consejo Asesor Provincial de coordinación y promoción de ablaciones e implantes de órganos.

Ley 2176 Obligatoriedad del rastreo en sangre capilar del recién nacido para la detección de fenilcetonuria e hipotiroidismo congénito.

Ley 2188 Sistema de Protección Integral de la Persona Alcohólica.

Ley 2330 Adhesión a la Ley Nacional N° 23798, que declara de interés nacional la lucha contra el S.I.D.A.

Ley 2668 Adhesión al artículo 17 de la Ley Nacional N° 24788 sobre lucha contra el alcoholismo.

Ley 2704 Adhesión a la Ley Nacional N° 25649 sobre medicamentos, nombre genérico.

Ley 2755 Implementación gratuita anual del papanicolau (PAP) y estudio de prevención cáncer de próstata (PSA) para afiliados a la caja de servicios sociales.

Ley 2788 Adhesión a Ley Nacional N° 25415 sobre "Prevención y detección temprana de hipoacusia".

Ley 2834 Adhesión a Ley Nacional N° 25392. Registro nacional de donantes de células progenitoras hematopoyéticas.

Ley 2877 Aprueba convenio programa de atención al paciente miasténico.

Ley 2956 Prohibición de fabricación y comercialización de medicamentos que asocian sustancias ansiolíticas con anoréxicas, diuréticas, hormonas y laxantes.

Ley 2993 De la accesibilidad a los recursos genéticos y bioquímicas provinciales.

Ley 3018 Convenio de ejecución para garantizar la seguridad alimentaria.

Ley 3052 Prevención y control de trastornos alimentarios.

Ley 3082 Prevención y tratamiento de la ludopatía.

Ley 3085 Asistencia al celiaco.

Ley 3148 Institución del mes de octubre como mes del cáncer de mama. Creación de fondo provincial.

Ley 3165 Creación del programa "Campamentos para diabéticos, celíacos y obesos".

Ley 3230 Adhesión a Ley Nacional N° 23753. Problemática derivada de la enfermedad diabética, y a la Ley Nacional N° 25788 de ingreso laboral de diabéticos.

Ley 3238 Adhesión a Ley Nacional N° 26689. Promoción del cuidado integral de la salud de personas con enfermedades poco frecuentes.

Ley 3253 Menús bajas calorías o dietarios en cartas de restaurantes.

Ley 3288 Adhesión Provincial a la Ley Nacional de Derechos del Paciente en su Relación con los Profesionales e Instituciones de la Salud.

Ley 3329 Control y prevención del tabaquismo.

Ley 3333 Adhesión provincial a Ley Nacional N° 26872 sobre cobertura de la cirugía reconstructiva.

Ley 3337 Promover la reducción del consumo de sodio en el ámbito de la Provincia.

Ley 3343 Asegura aplicación de lo establecido en Ley Nacional N° 26657 sobre salud mental en la Provincia de Santa Cruz.

Ley 3355 Adhesión provincial a Ley Nacional N° 26928. Creación del sistema de Protección del Sistema de Protección integral para personas trasplantadas.

Ley 3369 Adhesión Provincial a Ley Nacional N° 26835 sobre promoción y capacitación en las técnicas de reanimación cardiopulmonar básicas.

SECTORES ESPECIALES

“...Considerando que las Naciones Unidas han manifestado en diversas ocasiones su profundo interés por los refugiados y se han esforzado por asegurar a los refugiados el ejercicio más amplio posible de los derechos y libertades fundamentales, (...)

Considerando que la concesión del derecho de asilo puede resultar excesivamente onerosa para ciertos países y que la solución satisfactoria de los problemas cuyo alcance y carácter internacionales han sido reconocidos por las Naciones Unidas no puede, por esto mismo, lograrse sin solidaridad internacional,

Expresando el deseo de que todos los Estados, reconociendo el carácter social y humanitario del problema de los refugiados, hagan cuanto les sea posible por evitar que este problema se convierta en causa de tirantez entre Estados...”

Convención sobre el Estatuto de los Refugiados.

Ley 1981 Beneficios a ex-combatientes del conflicto de las islas Malvinas.

Ley 2747 Creación de la Comisión del Veterano de Guerra y de la Pensión de Veteranos de Guerra de Malvinas (heroes de Malvinas).

Ley 2915 Gratuidad de tramites administrativos y/o judiciales a ex-combatientes de Malvinas.

Ley 3060 Jubilación ordinaria para veteranos de guerra de Malvinas.

SEGURIDAD SOCIAL

“...El concepto del Piso de Protección Social se basa en principios compartidos de justicia social y en el derecho universal de todas las personas a la seguridad social y a un nivel de

vida adecuado para la salud y bienestar de ellas y sus familias que incluya aspectos tales como la alimentación, el vestido, la vivienda, la atención médica y los servicios sociales necesarios. Se trata de un enfoque basado en los derechos cuya idea fundamental es que nadie debería vivir por debajo de un determinado nivel de ingresos y que todo el mundo debería al menos poder acceder a servicios sociales básicos con el fin de mejorar sus posibilidades de acceder a un trabajo decente.

El Piso de Protección Social, en la definición de la Junta de Jefes Ejecutivos del Sistema de las Naciones Unidas para la Coordinación (JJE), es un conjunto integrado de políticas sociales diseñado para garantizar a toda persona la seguridad de los ingresos y el acceso a los servicios sociales esenciales, prestando especial atención a los grupos vulnerables y protegiendo y capacitando a las personas a lo largo del ciclo de vida. El Piso Social prevé garantías en materia de:

- *seguridad básica de los ingresos, mediante diversas formas de transferencias sociales (monetarias o en especie), tales como pensiones para las personas de edad o para las personas con discapacidades, prestaciones por hijos a cargo, prestaciones de apoyo a los ingresos y/o garantías y servicios relativos al empleo para las personas desempleadas y los trabajadores pobres;*
- *acceso universal y asequibilidad a servicios sociales esenciales en los ámbitos de la salud, agua y saneamiento, educación, seguridad alimentaria, vivienda y otras esferas definidas en las prioridades nacionales (JJE , 2009a; OIT y OMS, 2009)..."*

Piso de Protección Social para una Globalización Equitativa e Inclusiva, informe del Grupo presidido por Michelle Bachelet convocado por la OIT con colaboración de la OMS.

Ley 48 Pensiones a la vejez.

Ley 2747 Creación de la Comisión del Veterano de Guerra y de la Pensión de Veteranos de Guerra de Malvinas (Héroes de Malvinas).

Ley 2884 Incorpora a la Ley Provincial N° 1662 beneficio para madre de hijo discapacitado.

Ley 2910 Implementación del Programa Jefes de Hogar.

Ley 2908 Convenio de ejecución plan nacional de seguridad alimentaria "El hambre mas urgente", comedores escolares.

SINDICALIZACION

“...Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a garantizar:

a) El derecho de toda persona a fundar sindicatos y a afiliarse al de su elección, con sujeción únicamente a los estatutos de la organización correspondiente, para promover y proteger sus intereses económicos y sociales. No podrán imponerse otras restricciones al ejercicio de este derecho que las que prescriba la ley y que sean necesarias en una sociedad democrática en interés de la seguridad nacional o del orden público, o para la protección de los derechos y libertades ajenos;

b) El derecho de los sindicatos a formar federaciones o confederaciones nacionales y el de éstas a fundar organizaciones sindicales internacionales o a afiliarse a las mismas;

c) El derecho de los sindicatos a funcionar sin obstáculos y sin otras limitaciones que las que prescriba la ley y que sean necesarias en una sociedad democrática en interés de la seguridad nacional o del orden público, o para la protección de los derechos y libertades ajenos;

d) El derecho de huelga, ejercido de conformidad con las leyes de cada país.

2. El presente artículo no impedirá someter a restricciones legales el ejercicio de tales derechos por los miembros de las fuerzas armadas, de la policía o de la administración del Estado.

3. Nada de lo dispuesto en este artículo autorizará a los Estados Partes en el Convenio de la Organización Internacional del Trabajo de 1948 relativo a la libertad sindical y a la protección del derecho de sindicación a adoptar medidas legislativas que menoscaben las garantías previstas en dicho Convenio o a aplicar la ley en forma que menoscabe dichas garantías...”

Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

Ley 2986 Negociaciones colectivas de trabajo entre la Administración Pública provincial y las asociaciones sindicales.

SISTEMA DE POLÍTICA POLICIAL, SEGURIDAD Y JUSTICIA.

Ley 688 Ley orgánica de la policía de la provincia de Santa Cruz (L.O.P.S.C.).

Ley 2088 Crease el centro de asistencia a la víctima de delitos.

Ley 2720 Adhesión a la Ley Nacional N° 24059 de seguridad interior.

Ley 2832 Creación del centro de asistencia a la víctima.

Ley 3125 Código contravencional de la Provincia de Santa Cruz.

SITUACIÓN DE ENCIERRO

“...considerando que, de conformidad con los principios proclamados en la Carta de las Naciones Unidas, el reconocimiento de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana es la base de la libertad, la justicia y la paz en el mundo; reconociendo que estos derechos emanan de la dignidad inherente de la persona humana; considerando la obligación que incumbe a los Estados en virtud de la Carta, en particular del artículo 55, de promover el respeto universal y la observancia de los derechos humanos y las libertades fundamentales;

teniendo en cuenta el artículo 5 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y el artículo 7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que proclaman que nadie será sometido a tortura ni a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes;

teniendo en cuenta asimismo la Declaración sobre la protección de todas las personas contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, aprobada por la Asamblea General el 9 de diciembre de 1975; deseando hacer más eficaz la lucha contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes en todo el mundo...”

Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Cruels, Inhumanos o Degradantes.

Ley 1648 Reparación económica a toda persona condenada por error.

Ley 3224 Creación de la Dirección Policial Penitenciaria.

Ley 3377 Convenio con Nación para articular la asistencia de condenados liberados condicionales y asistidos que hayan agotado su pena.

TRABAJO

“...Considerando que la paz universal y permanente sólo puede basarse en la justicia social;

Considerando que existen condiciones de trabajo que entrañan tal grado de injusticia, miseria y privaciones para gran número de seres humanos, que el descontento causado constituye una amenaza para la paz y armonía universales; y considerando que es urgente mejorar dichas condiciones, por ejemplo, en lo concerniente a reglamentación de las horas de trabajo, fijación de la duración máxima de la jornada y de la semana de trabajo, contratación de la mano de obra, lucha contra el desempleo, garantía de un salario vital adecuado, protección del trabajador contra las enfermedades, sean o no profesionales, y contra los accidentes del trabajo, protección de los niños, de los adolescentes y de las mujeres, pensiones de vejez y de invalidez, protección de los intereses de los trabajadores ocupados en el extranjero, reconocimiento del principio de salario igual por un trabajo de igual valor y del principio de libertad sindical, organización de la enseñanza profesional y técnica y otras medidas análogas;

Considerando que si cualquier nación no adoptare un régimen de trabajo realmente humano, esta omisión constituiría un obstáculo a los esfuerzos de otras naciones que deseen mejorar la suerte de los trabajadores en sus propios países:

Las Altas Partes Contratantes, movidas por sentimientos de justicia y de humanidad y por el deseo de asegurar la paz permanente en el mundo, y a los efectos de alcanzar los objetivos expuestos en este preámbulo, convienen en la siguiente Constitución de la Organización Internacional del Trabajo...”

Constitución de la Organización Internacional del Trabajo.

Ley 2506 Pacto federal del trabajo.

Ley 2788 Adhesión a Ley Nacional N° 25415 sobre "Prevención y detección temprana de hipoacusia".

Ley 2819 Programa de emprendimientos para la mujer santacruceña (PRO.EM.SA.).

Ley 2911 Creación de Registro Único de Solicitudes de Empleo (R.U.S.E.).

VIVIENDA Y HABITAT

“...Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a una mejora continua de las condiciones de existencia. Los Estados Partes tomarán medidas apropiadas para asegurar la efectividad de este derecho, reconociendo a este efecto la importancia esencial de la cooperación internacional fundada en el libre consentimiento...”

Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

Ley 1179 Creación del instituto de desarrollo urbano y vivienda (I.D.U.V.).

Ley 2657 Adhesión a la Ley Nacional N° 25.737, sobre suspensión de ejecuciones de viviendas.

Sancionada: Noviembre 30 de 2000.

Promulgada de Hecho: Enero 8 de 2001.

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso, etc. sancionan con fuerza de Ley:

INFORME ANUAL DE LA SITUACION DE LOS DERECHOS HUMANOS EN LA REPUBLICA ARGENTINA

ARTICULO 1° — El Congreso de la Nación elaborará un INFORME ANUAL SOBRE LA SITUACION DE LOS DERECHOS HUMANOS EN LA REPUBLICA ARGENTINA, en adelante "El Informe".

ARTICULO 2° — La redacción del Informe corresponderá a las Comisiones de Derechos Humanos y Garantías de la Honorable Cámara de Diputados y a la Comisión de Derechos y Garantías del Honorable Senado de la Nación, las cuales establecerán la metodología para la realización del trabajo.

ARTICULO 3° — Se requerirá la colaboración de Organizaciones No Gubernamentales especializadas en la materia.

ARTICULO 4° — El Informe deberá ser aprobado por la mayoría simple de

ambas Cámaras, en sesiones especiales convocadas al efecto por las respectivas Presidencias.

Una vez aprobado, la Biblioteca del Congreso de la Nación procederá a su publicación, y las comisiones permanentes indicadas en el artículo 2° serán las encargadas de su difusión pública.

ARTICULO 5° — El Informe debe abarcar los contenidos especificados a continuación:

- 1) Garantías del ciudadano: Sistemas de política de seguridad y justicia:
 - a. Sistema de política policial;
 - b. Sistema de administración de justicia penal y correccional;
 - c. Sistema de penitenciaría;
 - d. Acceso de justicia.
- 2) Vigencia de los derechos políticos.
- 3) Vigencia de la libertad de expresión.
- 4) Derechos y protección de sectores especiales:
 - a. Mujer;
 - b. Niñez y adolescencia;
 - c. Poblaciones nativas (indígenas);
 - d. Minorías (discriminación);
 - e. Personas con discapacidades;
 - f. Tercera edad.
- 5) Desaparecidos:
 - a. Derecho a la verdad;
 - b. Sustracción de menores;
 - c. Reparación a las víctimas de la dictadura militar;

d. Causas judiciales.

6) Política exterior de Derechos Humanos:

a. Posición argentina en foros internacionales;

b. Posición argentina en el Mercosur;

c. Convenios internacionales de derechos humanos, su cumplimiento.

ARTICULO 6° — Se invita a las provincias para que, a través de los organismos que correspondan, colaboren con la elaboración del informe.

ARTICULO 7° — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONGRESO ARGENTINO, EN BUENOS AIRES, A LOS TREINTA DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL

—REGISTRADO BAJO EL N° 25.391—

RAFAEL PASCUAL.— MARIO A. LOSADA.— Guillermo Aramburu. —
Juan C. Oyarzún.

Recomendación del Observatorio de Derechos Humanos del Senado de la Nación sobre leyes nacionales en materia de Derechos Humanos*

Desde hace tiempo se ha empezado a instalar un debate en el seno de las Comisiones del Senado de la Nación, en relación a la invitación a las provincias a adherir a las leyes nacionales. La pregunta es: ¿todas las leyes deben contar con el artículo de forma que invita a las provincias a adherir, o algunas son imperativas para las provincias, sin necesidad de su adhesión, debido al asunto legislado?

En este documento, el Observatorio de Derechos Humanos del Senado de la Nación, se propone desarrollar los argumentos jurídico-constitucionales, que avalan la segunda postura en todos los casos en que las leyes tengan como objeto cuestiones de Derechos Humanos.

Efectivamente, el artículo 75 inciso 22 de la Constitución Nacional¹ otorga jerarquía constitucional a los tratados internacionales de derechos humanos, y se aplican respecto de estos derechos los principios surgidos de la jurisprudencia nacional e internacional y de la doctrina comparada, entre ellos la operatividad de los tratados de derechos humanos², y la imposibilidad del Estado Nacional de excusarse para el cumplimiento en su organización federal, alegando que la temática es de competencia local, dice al respecto Bidart Campos: “El *sujeto pasivo* directamente gravado con *obligaciones* emergentes de los tratados de derechos humanos es el Estado, y la relación de alteridad se traba entre cada *persona física* que compone la población o está bajo la jurisdicción de estado, y el propio *estado* (federal, en casos como el de Argentina).³

Esto implica que cuando se inicia una denuncia ante los tribunales internacionales con fundamento en el incumplimiento de la garantía de

1 Constitución de la Nación Argentina

2 Lorenzetti, R y Kraut, A, *Derechos humanos: justicia y reparación*, Buenos Aires, Sudamericana, 2011, pag. 39.

3 Bidart Campos, G, “El artículo 75, inciso 22, de la Constitución Nacional”, *La aplicación de los tratados de derechos humanos por los tribunales locales*, Buenos Aires, CELS-Ediciones del Puerto, 1997, pag. 83.

algún derecho consagrado en los tratados internacionales de derechos humanos que integran nuestro bloque constitucional, dicha denuncia se dirige siempre contra el estado nacional, sin importar si la responsabilidad del incumplimiento se debe a la conducta de una provincia. Y lo mismo sucede con la condena, que siempre recaerá sobre el estado nacional.

Asimismo, el artículo 75 inciso 23, párrafo primero, pone en cabeza de los legisladores nacionales la responsabilidad, al establecer que corresponde al Congreso Nacional *“Legislar y promover medidas de acción positiva que garanticen la igualdad real de oportunidades y de trato, y el pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos por esta Constitución y por los tratados internacionales vigentes sobre derechos humanos, en particular respecto de los niños, las mujeres, los ancianos y las personas con discapacidad.”*⁴

Es decir, a través de la interpretación armoniosa de estos incisos del artículo 75, y de la jurisprudencia, se infiere el rol de garante que asume el estado nacional en relación a la vigencia y respeto de los derechos humanos en nuestro país.

¿Cómo se traduce este mandato en acciones concretas del Congreso Nacional? Justamente legislando marcos regulatorios de contenidos mínimos que aseguren a todos los habitantes de la nación iguales derechos.

No es posible que un habitante de una provincia que adhiere a una ley nacional tenga garantizado un derecho constitucional, y al mismo tiempo un habitante de otra provincia que no haya adherido a esa misma ley, no tenga garantizado ese mismo derecho.

Tomemos el caso de la Ley 24.901, que establece en su artículo 1° un sistema de prestaciones básicas de atención integral a favor de las personas con discapacidad, uno de los grupo mencionados específicamente en el artículo 75 inciso 23; según datos de la Comisión Nacional Asesora para la Integración de las Personas con Discapacidad (CONADIS), hasta el

4 Constitución de la Nación Argentina

momento sólo veinte provincias se encuentran adheridas a la ley nacional⁵, por lo tanto un habitante con discapacidad de una provincia que se encuentre entre las veinte que adhirieron a la ley tendrá acceso a la atención integral, mientras que un habitante con discapacidad de una de las provincias que no adhirió expresamente a la ley, no contará con la misma cobertura. Esta situación no sólo es injusta, sino también inadmisibles jurídicamente, ya que en el artículo 16, nuestra Constitución Nacional establece que todos los habitantes de la Nación Argentina son iguales ante la ley.⁶

Este ejemplo es especialmente interesante, ya que dentro del articulado de la Ley 24.901, no se establece la invitación a las provincias a adherir, es decir que los legisladores en su momento dieron por sentado que esta ley nacional constituía un marco regulatorio de contenidos mínimos vigente en todo el territorio nacional.

Ahora bien, hablamos de marcos regulatorios de contenidos mínimos, porque el sistema internacional de protección de derechos humanos tiene como objetivo garantizar a los individuos un mínimo de protección, sin perjuicio de otros derechos que puedan garantizarse, según surge de lo dispuesto en el artículo 29 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que dice: “Ninguna disposición de la presente Convención puede ser interpretada en el sentido de: a) permitir a alguno de los Estados Partes, grupo o persona, suprimir el goce y ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en la Convención o limitarlos en mayor medida que la prevista en ella; b) limitar el goce y ejercicio de cualquier derecho o libertad que pueda estar reconocido de acuerdo con las leyes de cualquiera de los Estados Partes o de acuerdo con otra convención en que sea parte uno de dichos Estados; c) excluir otros derechos y garantías que son inherentes al ser humano o que se derivan de la forma democrática representativa de gobierno; y d) excluir o limitar el efecto que puedan producir la Declaración

5 Disponible en <http://www.conadis.gov.ar/sistema.html> (consulta realizada el 9/4/2014).

6 Constitución de la Nación Argentina

Americana de Derechos y Deberes del Hombre, y otros actos internacionales de la misma naturaleza”.⁷

Por todo lo expuesto, este Observatorio recomienda, a fin de hacer plenamente efectivo el rol de garante que el Estado Argentino asumió con la incorporación de los tratados de Derechos Humanos a nuestro bloque constitucional, incorporar en toda ley nacional que regule materias de derechos humanos un artículo de forma que diga: “Las disposiciones de la presente ley son de orden público y de aplicación obligatoria en todo el territorio de la República Argentina. Se invita a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a sancionar, para el ámbito de sus exclusivas competencias, las normas correspondientes, que de ninguna manera podrán limitar o restringir los derechos consagrados en esta.”

Elena M. Corregido

Directora General

Observatorio de Derechos Humanos del H. Senado de la Nación

*Este documento ha sido elaborado por Betina Cuñado, abogada y diplomada en género y políticas de igualdad, integrante del Observatorio de Derechos Humanos del H. Senado de la Nación. Mayo de 2014.

⁷ Disponible en: <http://www.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/25000-29999/28152/norma.htm>

Fuentes

1. Constitución de la Nación Argentina.
2. Sistema Argentino de Información Jurídica.
3. Informe Anual sobre la Situación Legislativa de los Derechos Humanos en la República Argentina, realizado durante el año 2013 por el Diputado Nacional Remo Carlotto y su equipo de trabajo.